



*Grupo Empresarial C.I.R. Abogados  
Clara Inés Rodríguez Otálora  
Abogada - Especialista.  
U. Externado de Colombia*

Honorables Magistrados:  
**TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL**  
Yopal – Casanare  
E. S. D.

**Ref: Proceso:** Ordinario laboral 850013105001- 2018-00138-1  
**Demandante:** José Jacinto Huertas Campos  
**Demandado:** Fondo de Fomento Agropecuario y Microempresarial de Aguazul  
“FFAMA”

**Asunto:** Sustentación del Recurso de apelación incoado en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 16 de diciembre del año 2020.

**CLARA INÉS RODRÍGUEZ OTÁLORA**, identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, por medio del presente escrito y estando dentro del término de ley, me permito sustentar el recurso de apelación incoado en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Laboral del Circuito el día 16 de diciembre del año 2020, en los siguientes términos:

Argumenta el Juzgado en sentencia de primera instancia al resolver el asunto, entre otras razones, consideró que el actor no estaba cobijada por la garantía de estabilidad laboral reforzada, porque no se cumplían los requisitos para considerarla en situación de pre pensionado, puesto que al momento de la terminación del contrato de trabajo no tenía cumplido los requisitos legales de edad, pues contaba 55 años y el número de semanas cotizadas, no correspondía al establecido en la norma, para que se le reconociera el derecho pensional, por parte de la administradora de pensiones a la cual se encontraba afiliada.

En torno a la condición de sujeto pre pensionado, la Corte delimitó el concepto para efectos de la protección reforzada reconocida por el legislador, en **la sentencia C-795 de 2009, Magistrado Ponente: Dr. LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA, expediente D-7725** establece una definición de pre pensionado así:

“(i) [Definición de pre pensionado:] (...) tiene la condición de pre pensionado para efectos de la protección reforzada reconocida por el legislador a sujetos de especial vulnerabilidad, en el contexto de procesos de renovación de la administración pública, el servidor público próximo a pensionarse al cual le falten tres (3) o menos años para reunir los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas de cotización para obtener el disfrute de la pensión de jubilación o vejez”.

No obstante, mediante la jurisprudencia emitida por la Corte Constitucional, este fuero se extendió a los trabajadores del sector privado.

**Ahora bien, la Corte Constitucional, mediante Sentencia T-229 del veinte (20) de abril de 2017, Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA, en donde se señala:**



Grupo Empresarial C.I.R. Abogados  
Clara Inés Rodríguez Otálora  
Abogada - Especialista.  
U. Externado de Colombia

*“Esta Sala Primera de Revisión se ha pronunciado sobre los derechos que le asisten al trabajador, ya sea público o privado, de que se respete su condición de prepensionado y por ende goce de estabilidad laboral hasta que le sea reconocida su pensión al cumplir el status pensional y sea incluido en nómina de pensionados, en los siguientes términos:*

*En reciente pronunciamiento la Corte ha concluido, luego del estudio de las distintas normas que gobiernan la relación laboral a nivel privado, que si bien en ninguna de ellas se contempla una especial protección para los trabajadores que han cumplido o están próximos a cumplir el estatus pensional, como sí ocurre con el servidor público, ello no constituye un obstáculo para que, basando en los principios que gobiernan la relación laboral y que se derivan del artículo 53 de la Constitución Política, se pueda y se deba extender esta prerrogativa a los trabajadores privados. Ahora bien, la garantía y protección que se predica de la condición de prepensionado, no se deriva única y exclusivamente de esta situación, sino que, es necesario que se demuestre que el despido ocasiona una amenaza o un riesgo para otros derechos fundamentales, entre ellos, el mínimo vital, pues es entendible que una persona que está próxima a pensionarse y que deriva el sustento propio y el de su familia de lo devengado, si es retirado del servicio abruptamente y faltándole menos de tres años para adquirir su status pensional, tendrá dificultades para conseguir un nuevo empleo y por tanto, se verá afectado su mínimo vital, circunstancia que haría imperiosa la intervención del juez de tutela. (...)”*

De acuerdo la citada jurisprudencia, es claro su señoría, que en el caso en concreto, se logra determinar y probar los siguientes aspectos:

1. Que efectivamente el trabajador señor José Jacinto Huertas Campos, laboró para el FFAMA desde el año 2012 y hasta el año 2017, por contrato de trabajo a término fijo en el empleo de trabajador oficial de esta entidad y así se aceptó por la demandada.
2. Que mi representado ejerció el cargo signado de manera personal, atendiendo las instrucciones del empleador sin que se recibiera queja alguna, pues no se demostró lo contrario el acervo probatorio que se aporta.
3. Que a la terminación de la relación laboral, esto es el día 3 de septiembre del año 2017, mi representado contaba con 1.184,43, semanas de cotización en pensión, faltando tan solo 115,57, semanas para poder cumplir el tiempo exigido por la norma para adquirir el derecho a pensión de vejez, y así se logró probar con la historia laboral se aportó no solo por la parte actora obrante a folio 33 del expediente, sino que además se allegó por Colpensiones el REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES, actualizado a fecha a corte de 6 de octubre del año 2020, en cual se evidencia que cotizó solo hasta el mes de septiembre del año 2017, teniendo como empleador al aquí demandado, RESUMEN QUE DEMUESTRA UN NUMERO DE SEMANAS DE **1.210.71**.

Se puede observar que el ultimo empleador que cotizó al derecho de pensión fue la caja de compensación de comfacasanare, pues esto obedeció a que mi representado reclamo y le



Grupo Empresarial C.I.R. Abogados  
Clara Inés Rodríguez Otálora  
Abogada - Especialista.  
U. Externado de Colombia

fue otorgado el subsidio de desempleo, debido a que no contaba con suficientes recursos para sus manutención y la de su familia.

Queda probado, que mi representado después de haber terminado su relación laboral con la aquí demanda, no contó con los recursos económicos que le permitiesen seguir realizando los aportes en pensión y que además no contaba con los recursos para el sostenimiento suyo y de su familia.

Considera entonces esta apoderada que erro el despacho al no realizar el estudio del caso de manera íntegra sino que se limitó a determinar que el actor no contaba con la edad, razón para ese despacho suficiente para no abordar los demás casos, como es el de determinar que con la terminación del contrato de trabajo y la edad de mi representado imposibilitaba el ingreso de un nuevo vínculo laboral con cualquier otra entidad, más aun cuando solo le faltaban 99 semanas de cotización para cumplir uno de los requisitos y poder así adquirir el derecho a la pensión, pues bien, al dar por terminada la relación laboral y teniendo en cuenta que mi representado no contaba con más recursos económicos para poder sufragar los gastos de aportes en pensión ni mucho menos ofrecer una calidad de vida digna a su familia, se vulnerar el derecho a la estabilidad laboral reforzada alegada en el presente proceso.

Es por ello que con el despido del trabajador se afectó el mínimo vital del trabajador tal y como se especificó claramente dentro del libelo demandatorio, mi representado solo percibía el salario que devengaba en el FFAMA y con este alimentaba a su familia conformada por su esposa y sus hijas, quienes para la época de lo hecho vivían con el actor, a dejar de recibirlo, no solo se afectó su calidad de vida en condiciones digna sino la de su núcleo familiar.

Respecto a lo anterior, la Corte constitucional en Sentencia T-1078/05, expediente T-1146166, Magistrado Ponente: **Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO**, establecio que:

#### **MINIMO VITAL**-Carga de la prueba

*“Puede ocurrir que el afectado solamente afirme que tal incumplimiento lo pone en una situación crítica dada la carencia de otros ingresos para asegurar su subsistencia. Ante este tipo de manifestación, la carga de la prueba se invierte y corresponde a la entidad demandada demostrar lo contrario. De no hacerlo, se entenderá que el hecho al que se refiere la negación se encuentra plenamente probado. No obstante, si lo consignado en la demanda de tutela y/o en el plenario es insuficiente para que el juez pueda deducir que el salario es el único ingreso y que se encuentra por tanto afectado el mínimo vital, debe, como director del proceso, decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para verificar la real situación económica en que se encuentra el peticionario”.*



*Grupo Empresarial C.I.R. Abogados  
Clara Inés Rodríguez Otálora  
Abogada - Especialista.  
U. Externado de Colombia*

Por lo esbozado en precedencia, solicito de manera respetuosa lo siguiente:

### **PETICIÓN**

**PRIMERO:** Se conceda el recurso de apelación y en consecuencia se modifique el sentido del fallo emitido por el Juzgado que conoció en primera instancia y en consecuencia se reconozcan las pretensiones de la demanda.-

Sin otro particular,

Del Honorable Magistrado,

Atentamente,

  
**CLARA INÉS RODRÍGUEZ OTÁLORA**  
C.C. No. 33.647.131 de Aguazul  
T.P. No 192.736 del C. S. de la J.